

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SIBATE  
Sibaté, diecinueve de abril de dos mil veintidós

Se encuentran al Despacho las presentes diligencias a fin de proferir la decisión que en derecho corresponde respecto de la petición de acción de tutela instaurada por la señora MARIA FERNANDA CIFUENTES ORTIZ en contra de INVERSIONES LUCEDMARB S.A., representada legalmente por el Dr. Luis Martín Granada Camacho y/o quien haga sus veces.

ANTECEDENTES

La señora MARIA FERNANDA CIFUENTES ORTIZ a través de apoderado, instauró ante este Despacho acción de tutela en contra de de INVERSIONES LUCEDMARB S.A., representada legalmente por el Dr. Luis Martín Granada Camacho y/o quien haga sus veces, solicitando se tutele el derecho fundamental de petición.

Como fundamento de su petición la accionante narra los hechos indicando que el 10 de febrero de 2022, por medio de los correos electrónicos serviciosintegrales165@yahoo.com.co, umqsanluis@yahoo.com, radicó derecho de petición solicitando certificado de ingresos y retenciones del año 2021, por concepto de sus honorarios en el tiempo laborado en dicha entidad.

Afirma que a la fecha INVERSIONES LUCEDMARB S.A. no ha dado contestación al derecho de petición, incumpliendo la normatividad vigente ya que han transcurrido más de 47 días de radicado dicho derecho de petición y no se ha dado respuesta alguna.

Indica que se le ha vulnerado el derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, en concordancia con el artículo 13 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.

Como fundamentos de derecho cita el artículo 86 de la Constitución Política, artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, Sentencia 441 de 2013.

Pretende se tutele a su favor, el derecho fundamental de petición, que en interés particular ha sido ejercitado ante INVERSIONES LUCEDMARB S.A.S, representada legalmente por el Dr. Luis Martín Granada Camacho y/o quien haga sus veces. Que se ordene que con plazo perentorio de cuarenta y ocho horas (48), previsto en el numeral 5° del artículo 29 del decreto ley 2591, cumpla con las obligaciones de contestar el derecho de petición instaurado el 10 de febrero de 2022 por medio del correo electrónico serviciosintegrales165@yahoo.com.co umqsanluis@yahoo.com.

Allega como pruebas el apoderado de la accionante lo relacionado en el acápite de pruebas y anexos.

Este Juzgado avoco conocimiento y dispuso por el medio más eficaz notificar en legal forma a la accionada de INVERSIONES LUCEDMARB S.A., representada legalmente por el Dr. Luis Martín Granada Camacho y/o quien haga sus veces, para lo cual se libraron las comunicaciones como obra en el expediente. Se deja constancia que pese a que la accionada se encontraba notificada en legal forma la misma guardó silencio.

CONSIDERACIONES

En virtud al derecho constitucional establecido en el art. 86 la señora MARIA FERNANDA CIFUENTES ORTIZ, acude ante el juez a fin de que mediante un trámite preferencial y sumario se le tutele el derecho fundamental de petición consagrado en la Constitución Política.

El art.1° preceptúa: "...Colombia es un estado Social de derecho organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y



*pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general...*"

Nuestra Carta magna en su art. 2 indica: "... Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, proveer la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo..."

El art. 23 preceptúa: "Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales".

El derecho de petición está consagrado en la carta magna para que todas las personas que han presentado peticiones obtengan una pronta respuesta.

De igual forma este derecho es aquel que tienen los ciudadanos de dirigirse a una autoridad, con la seguridad que van a recibir una respuesta pronta, oportuna sobre su pedimento, esta respuesta debe definir de fondo la solicitud elevada o por lo menos explicar con claridad las etapas, medios términos o procesos necesarios para dar una respuesta definitiva y contundente a quien la presentó, así se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional, esa omisión en que incurre la autoridad al no responder las peticiones con la necesaria prontitud, es de por sí una violación al derecho de petición.

Como se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional, "la naturaleza del derecho de petición, y en particular su núcleo esencial, como derecho fundamental objeto de protección tutelar, es la certidumbre de que, independientemente del contenido de lo que se solicita, se obtenga una respuesta oportuna y eficaz, es decir, que resuelva en su fondo lo pedido por el particular.

Igualmente, ha establecido la Honorable Corte Constitucional que el núcleo esencial de este derecho está determinado por la pronta respuesta o resolución a lo pedido, respuesta que se entiende dada cuando se resuelve de fondo la cuestión planteada, sin importar si es a favor o en contra de las pretensiones del solicitante y, en la efectiva notificación del acto, a través del cual, se resuelve la petición presentada.

La sentencia T-149/13 indica: "... 4.1. Esta Corporación ha precisado que el derecho de petición consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política, es una garantía fundamental de aplicación inmediata (C.P. art. 85), cuya efectividad resulta indispensable para la consecución de los fines esenciales del Estado, especialmente el servicio a la comunidad, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la misma Carta Política y la participación de todos en las decisiones que los afectan; así como el cumplimiento de las funciones y los deberes de protección para los cuales fueron instituidas la autoridades de la República (C.P. art. 2). (...)

(...) 4.2. Según su regulación legislativa, así como en el Decreto 01 de 1984, el actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que el ejercicio del derecho de petición, entendido también como una actuación administrativa, debe someterse a los principios de economía, imparcialidad, contradicción, eficacia y, especialmente, publicidad y celeridad, según lo estipula el Artículo 30. del estatuto..." (...)

(...) 4.3. Entendido así, como garantía constitucional y legal, el ejercicio del derecho de petición por parte de los ciudadanos supone el movimiento del aparato estatal con el fin de resolver la petición elevada e impone a las autoridades una obligación de hacer, que se traduce en el deber de dar pronta respuesta al peticionario.

4.4. Justamente, este deber esencial de parte de la administración, que se deriva del mandato superior a obtener pronta resolución, ha sido desarrollado y sistematizado por esta Corporación en conjunto con otros elementos característicos del derecho de petición, que conforman su núcleo fundamental.



4.5. La efectividad y el respeto por el derecho de petición se encuentran subordinados a que la autoridad requerida, o el particular según se trate, emitan una respuesta de fondo, clara, congruente, oportuna y con una notificación eficaz.

4.5.1. En relación con los tres elementos iniciales - resolución de fondo, clara y congruente-, la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado...

Revisadas las presentes diligencias, observa este Despacho que del material probatorio que aparece relacionado y anexo al expediente, se puede concluir efectivamente, que la accionante impetró derecho de petición el 10 de febrero de 2022 por correo electrónico ante la accionada.

Se tiene que, dentro de las presentes diligencias, la accionada de INVERSIONES LUCEDMARB S.A., representada legalmente por el Dr. Luis Martín Granada Camacho y/o quien haga sus veces pese a estar notificada en legal forma del auto admisorio de la presente acción de tutela guardó silencio y no obra constancia por parte de ésta en donde se evidencie que efectivamente haya dado contestación a la petición que fue enviada por la accionante el 10 de febrero de 2022 por correo electrónico conforme se desprende del escrito de tutela.

Teniendo en cuenta lo anterior carece este Despacho de la prueba sumaria en donde se pueda verificar que el derecho de petición del 10 de febrero de 2022 fue contestado por parte de INVERSIONES LUCEDMARB S.A., representada legalmente por el Dr. Luis Martín Granada Camacho y/o quien haga sus veces.

Por lo brevemente expuesto se procederá a tutelar el derecho fundamental de petición incoado por la señora MARIA FERNANDA CIFUENTES ORTIZ, en consecuencia, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión se ha de dar respuesta de fondo por parte de INVERSIONES LUCEDMARB S.A., representada legalmente por el Dr. Luis Martín Granada Camacho y/o quien haga sus veces, a la petición enviada por la señora MARIA PATRICIA MUÑOZ BERNAL el 10 de febrero de 2022 por correo electrónico, en legal forma.

Esta decisión se ha de notificar por el medio más eficaz, advirtiéndole a la parte accionante y a la accionada, que la anterior decisión es susceptible de impugnación, de no ser así, se ha de remitir a la H. Corte Constitucional, para su eventual revisión.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Promiscuo Municipal de Sibate Cundinamarca, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

#### RESUELVE

Primero: TUTELAR el derecho fundamental de petición incoado por la señora MARIA FERNANDA CIFUENTES ORTIZ quien se identifica con la C.C.N°1.017.242.501 de Medellín en consecuencia, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión se ha de dar respuesta de fondo por parte de INVERSIONES LUCEDMARB S.A., representada legalmente por el Dr. Luis Martín Granada Camacho y/o quien haga sus veces, a la petición enviada por la señora MARIA FERNANDA CIFUENTES ORTIZ el 10 de febrero de 2022 por correo electrónico en legal forma, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Segundo. Notifíquese la anterior decisión a la parte accionante y a la accionada, mediante cualquier medio idóneo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y Decreto 306 de 1992.



Tercero: La anterior decisión es susceptible de impugnación, de no ser impugnada remitase a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La Juez,



MARTHA ROCIO CHACON HERNANDEZ